La factura energética de España se abarata el 34% hasta febrero

EL PAÍS, **Madrid**

Las importaciones españolas de productos energéticos se redujeron un 34% en los dos primeros meses del año, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Economía. La factura del petróleo y el gas importados se abarató hasta febrero. Sin embargo, no fue suficiente para compensar el auge de importaciones de otros productos y el parón de las exportaciones, por lo que el déficit comercial aumentó un 4,3% en enero y febrero, hasta los 4.643,4 millones de euros.

La fuerte caída del precio del barril de petróleo en los últimos meses ha impactado con fuerza en la balanza comercial española, ya que es un producto que España debe importar. Los datos publicados ayer por Economía muestran que la importación de petróleo y derivados se redujo un 38,7%, hasta los 4.223 millones de euros. Las de gas, por su parte, decrecieron un 25,8%, hasta 1.595,1 millones. En el apartado energético, solo aumentaron las importaciones de carbón y electricidad, que crecieron un 24,7%, hasta 299,4 millones.

Como España también exporta derivados de petróleo elaborados a partir del crudo que recibe, la caída de precios de esta materia prima ha provocado a su vez un descenso en las exportaciones energéticas —aunque de menor cuantía— y bajan un 24,6%, hasta 1.592,4 millones. El saldo comercial del sector energético mejora así un 37,1%, al reducirse el déficit a 4.435,1 millones.

Exportación estancada

Esa mejora del capítulo energético no ha sido suficiente para mejorar la balanza comercial. En los dos primeros meses del año las exportaciones se mantienen estancadas, mientras que las exportaciones crecen un 0,4%. Así, el déficit comercial aumenta un 4,3%, hasta situarse en 4.633,4 millones de euros.

La desaceleración mostrada por varias de las principales economías emergentes, particularmente en América Latina, junto con el creciente fortalecimiento económico de la UE y la zona euro, están incrementando el peso de las exportaciones españolas hacia países comunitarios.

Desde la perspectiva sectorial, en este periodo se observó un comportamiento muy positivo del sector del automóvil, que incrementó sus ventas al exterior un 18,7% y supuso el 17,5% del total. También mostró una buena evolución el sector de manufacturas de consumo, cuyas exportaciones crecieron el 5,3% y representaron el 9,8% del total.

CC OO y UGT piden una renta mínima para dos millones de personas

Los sindicatos llevan hoy al Congreso la propuesta para una nueva ayuda, que costaría 11.000 millones anuales

MANUEL V. GÓMEZ
Madrid

CC OO y UGT reclaman la creación de una renta mínima para aquellos que no tienen ingresos y no tienen la posibilidad de percibir prestaciones por desempleo ni ayudas sociales. Ambas centrales han elaborado una proposición de ley que hoy tienen previsto llevar al Congreso de los Diputados en forma de Iniciativa Legislativa Popular, apuntan fuentes de ambas formaciones. La nueva ayuda que piden sería de 426 euros mensuales y llegaría, según los cálculos de CC OO a partir de datos del INE, a 2.150.000 personas.

El 15 de enero el Gobierno puso en marcha la creación de una ayuda de urgencia para todos los parados de larga duración que habían agotado las prestaciones y subsidios y estuvieran inscritos en los Servicios Públicos de Empleo antes del 1 de diciembre. Este subsidio puede llegar, según cifras del Ministerio de Empleo, a unos 300.000 beneficiarios, aunque de acuerdo con los datos últimos disponibles, de febrero, alcanzaba a casi 8.500 peronas.

La propuesta que ahora ponen sobre la mesa UGT y CC OO tiene un alcance mayor. Los cálculos sindicales sitúan en 1,8 millones el número de hogares que no llegan a los 6.000 euros de ingresos anuales. Partiendo de esta cifra, se concluye que los beneficiarios potenciales del programa ascenderían a más de 2,1 millones. Si se multiplica esta cifra por 426 euros mensuales (esta cantidad puede aumentar según el número de personas a cargo) y por 12 mensualidades se obtiene el presupuesto anual necesario: 11.000 millones (un 1% del producto interior bruto). Este dinero se financiaría con impuestos y no cotizaciones, según la propuesta sindical, aunque se integraría entre las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.

Todas estas cifras se alejan de otras propuestas de renta básica, como la que el partido político Podemos lanzó sin detallar en su programa de las elecciones europeas, aunque posteriormente se ha ido distanciando de ella. Mientras la Podemos, liderado por Pablo Iglesias, se dirigía a toda la ciudadanía independientemente de su nivel de rentas y situación laboral —lo que dispararía mucho el gasto— la que hacen los sindicatos está sujeta a unas condiciones de acceso que limitan su alcance. Hay que tener entre 18 y 65 años, estar parado e inscribirse como demandante de empleo y tener ingresos por debajo del 75% del salario mínimo interprofesional. Además, el derecho a cobrar la ayuda se mantendría mientras duren estas condiciones.

Entre los datos que manejan los sindicatos para apoyar su iniciativa aparecen algunas de las peores consecuencias de la crisis: 12,8 millones de personas en riesgo de pobreza, tres millones en situación de pobreza severa y 1,76 millones de hogares con todos sus miembros en paro. Y frente a estos datos, dos números que ponen de manifiesto que los mecanismos de protección del Estado de Bienestar en España se han quedado cortos: la tasa de protección de parados está en el 55,7% (la EPA rebaja esta cifra incluso al 30%) y la cobertura de las rentas autonómicas de inserción apenas cubren al 5,48%.

El objetivo inicial de la nueva ayuda sería cubrir ese vacío que se abre para quienes agotan las prestaciones y subsidios por desempleo y los salarios sociales autonómicos, dirigidos fundamentalmente a personas en grave riesgo de exclusión social. No se trataría, por tanto, de que liberar de gasto social a las comunidades autónomas, a las que piden que si se alivia la partida de rentas básicas (1.040 millones en 2013), destinen el dinero a otro tipo de ayudas sociales.

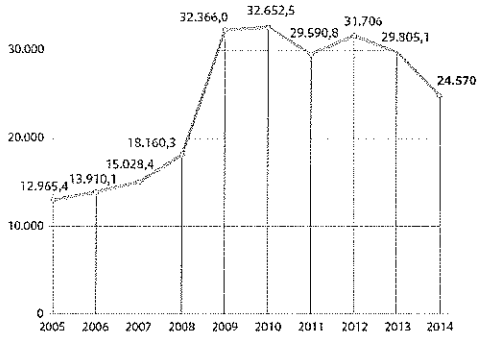
La incitativa de los sindicatos llega después de que el Ejecutivo no acabe de concretar el mapa de prestaciones al que se comprometió en la declaración que sindicatos, empresarios y Gobierno suscribieron en julio de 2014. Fruto de aquel documento se aprobó la ayuda a parados de larga duración en diciembre pasado. Aquel texto, en su quinto punto, admite que "es necesario profundizar en la protección social de todas aquellas personas más alejadas del mercado de trabajo y/o en riesgo de exclusión social". Para ello, se comprometieron a elaborar ese mapa que sería el punto de partida para constituir una mesa de negociación que, "en el plazo máximo de 6 meses", tiempo que expiró en febrero.

> Para pedir el subsidio habría que ingresar por debajo del 75% del salario mínimo

> El Ejecutivo no ha concretado el mapa de prestaciones comprometido

Las prestaciones en España

EVOLUCIÓN DE LAS PRESTACIONES
En millones de euros



A 28 de febrero	Beneficiarios	Cuantía media (euros)
Prestaciones contributivas	919.142	812
Subsidios	1.064.590	
Renta Activa de Inserción	160.564	
Subsidio Agrario	119.841	
Programa de Activación	8.478	
Tasa de cobertura del Ministerio de Empleo (%)	55,70	
Plan Prepara (1)	104.631	
Salarios Sociales autonómicos (2)	258.408	419

1. Datos de 2014.
2. Datos de 2013.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. EL PAÍS

La OCDE ve peligrar las pensiones de 80 millones de latinomericanos en 2050

EL PAÍS, **Madrid**

El envejecimiento de la población amenaza con incrementar el gasto de las pensiones en América Latina y el Caribe y poner en peligro los pagos a largo plazo, según advierte un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial. Al mismo tiempo, el elevado número de trabajadores en el sector informal (sumergido) que no hacen aportaciones para su pensión complicará la financiación de esos costes, señala el estudio.

En la actualidad, solo 45 de cada 100 trabajadores aportan capital a un plan de pensiones en la región, y este porcentaje apenas ha cambiado en las últimas décadas, según el organismo. Además de ser pocos, las contribuciones de estos trabajadores suelen ser demasiado irregulares para financiar unas prestaciones adecuadas. Para el año 2050, entre 63 y 83 millones de personas podrían no recibir una pensión adecuada en ausencia de reformas y de esfuerzos por aumentar el empleo en el sector formal, incluyendo el acceso a educación de calidad.

"Debemos actuar para asegurar el futuro de las pensiones de la región", señaló ayer el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. "Disfrutamos de un bono demográfico que no podemos desaprovechar. Si logramos que más personas contribuyan a los sistemas de pensiones, y logramos ajustar los sistemas al aumento de la esperanza de vida, podremos dotar a generaciones futuras de cobertura adecuada", indicó.

Según la OCDE, organismo que dirige Ángel Gurría, ampliar las llamadas pensiones no contributivas o sociales puede ayudar a disminuir la desigualdad y la pobreza, pero hacerlo supondrá cada vez un mayor un reto fiscal, a medida que la población envejezca y haya más solicitantes. Además, ahora hay en América Latina ocho personas en edad productiva por cada pensionista, pero se espera que en 2050, horizonte en el que se centra el informe, la tasa disminuya a 2,5, más cerca del promedio de la OCDE, del 1,9.

press reader Printed and distributed by PressReader PressReader.com + +1 604 278 4604 COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW